

Procedimiento: Aplicación General
Materia: Despido Injustificado y Prestaciones
Demandante: Salamanca Gallardo, Manuel
Demandado: Corp. Educ. Arica College
RIT O-289-2023
RUC 23- 4-0519156-3

Arica, a diecinueve de julio del año dos mil veinticuatro.

VISTO:

I.- De las Partes y sus Apoderados.

Que, doña **MANUEL ANTONIO SALAMANCA GALLARDO**, Profesor, cédula de identidad N° 17.553.151-3, domiciliado en esta ciudad, calle Alejandro Azolas N° 2124, departamento 303, block 4, patrocinado por el Abogado don Jorge Ortiz Bugueño, y como apoderado en juicio el Abogado don Nelson González Urra, con domicilio y forma de notificación registrados en autos, deduce demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, en contra de la **CORPORACION EDUCACIONAL ARICA COLLEGE**, del giro educacional, Rut 65.096.354-7, representada legalmente por don Jorge Cañipa Mamani, con domicilio en Arica, Avenida Argentina N° 2330.

Esta causa se tramitó conforme al procedimiento de aplicación general, de los artículos 446 y siguientes del Código del Trabajo, asignándole el Rit O-289-2023, y donde la demandada, patrocinada por el Abogado don Pedro Altamirano Valdebenito, y con apoderado en juicio el Abogado don Jorge Gallegos Cabezas, al contestar pidió el rechazo de la demanda, con costas.

La audiencia preparatoria se llevó a efecto el día 22 de noviembre de 2023, donde se realizó una breve relación de la demanda y de la contestación. Posteriormente, el Tribunal llamó a las partes a conciliación, proponiéndoles bases de un arreglo, sin estas llegaron a un acuerdo. En la misma audiencia se recibió la causa a prueba, estableciéndose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos a ser probados, en especial los hechos que conformaron el término de dicha relación y las formalidades del despido. Asimismo, las partes ofrecieron la prueba a rendir y exhibir.

En la audiencia de juicio, celebrada el día 2 de julio en curso, las partes incorporaron la prueba previamente ofrecida. Al efecto, por petición de la demandada y por resolución fundada se alteró el orden de la incorporación de la prueba. Asimismo, formularon las observaciones que les mereció los antecedentes probatorios, oportunidad en que reiteraron sus pretensiones, argumentos, y



alegaciones. El análisis de la prueba se hará en la parte considerativa de este fallo. También, el Tribunal fijó la oportunidad para la notificación de la sentencia definitiva.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

II.- De las Pretensiones y Defensas o Alegaciones de las Partes.

A.- De la Demanda del Actor.

PRIMERO: Que, don Manuel Antonio Salamanca Gallardo, ya individualizado, interpone demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, en contra de la Corporación Educacional Arica College, representada legalmente por don Jorge Cañipa Mamani.

Fundamenta su demanda en que la relación laboral entre las partes se inició el 9 de agosto de 2019; que se desempeñaba como Inspector Educacional; con una jornada de 44 horas semanales; y, que su remuneración mensual ascendía a la suma de \$1.605.422.-

En cuanto al despido, dice que con fecha 29 de agosto de 2023, y sin mediar explicación alguna, la demandada puso término al contrato de trabajo, por la causal del artículo 160 N° 2 del Código del Trabajo, esto es, negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador.

Dice que la causal es injustificada, indebida e improcedente, y da cuenta de circunstancias falsas y sacadas de contexto, y no explica de qué forma estos hechos configurarían una negociación incompatible.

Señala que habida consideración al vínculo de familiaridad que tiene con don Manuel Salamanca Sotomayor (su padre) y don Mauricio Salamanca Gallardo (su hermano), quienes constituyeron la Corporación Educacional Ayllu; que el inmueble en donde actualmente se emplaza el Colegio es arrendada a la Sociedad Inmobiliaria Espíndola Sotomayor S.A, de la cual su padre, el señor, Salamanca Sotomayor, es su socio mayoritario y representante legal; que la intención de su padre y su hermano hacerse cargo de la administración y representación legal de la comunidad educativa, sin ser actualmente parte legal integrante de esta y/o instalar en el antes referido inmueble su “propia” comunidad educativa (AYLLU); que los intereses y propósitos propios de su padre y hermano, ha venido ejerciendo sobre el personal docente, asistente de la educación y administrativos de la comunidad educativa presiones varias tendientes convencerles y/o animarles para que, en un futuro que usted señala como próximo (Año 2024 en adelante) comiencen a prestar servicios para la Corporación Educacional Ayllu, prometiéndoles y negociando en nombre de su padre y su hermano, y a título propio también, que a quienes decidan “Cambiar



o seguirle” le serán respetados todos sus derechos como trabajadores.

En relación con lo descrito en comunicación de despido, señala que hechos en ella detallados son contrarios a la realidad, además de ser totalmente genéricos e indeterminados, basados en supuestos dichos suyos, además de no ajustarse al derecho invocado en la misma carta. Agrega que sus conversaciones han sido sacadas de contexto y que de forma alguna se puede concluir que por medio de ellas estuviera efectuando proyectos o negocios relacionados con el giro del empleador, ni menos divulgando información.

Además, expone, no tiene vinculación contractual alguna con Corporación Educacional Ayllu, como tampoco con Sociedad Inmobiliaria Espíndola Sotomayor S.A.

Con fecha 7 de marzo de 2023, suscribió ante Notario Público el finiquito de trabajo, donde dejó reserva para demandar por despido injustificado y el cobro de las indemnizaciones.

Demanda las siguientes prestaciones: Indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de \$1.605.422.-; Indemnización por 4 años de servicio, por la suma de \$6.421.688.-; el recargo legal del 80% del artículo 168 del Código del Trabajo por la suma de \$5.137.350.-; la indemnización contenida en el Estatuto Docente entre el día 30 de agosto de 2023, al día 28 de febrero de 2024, por la suma de \$9.739.560.-

B.- De la Contestación de la Demandada.

SEGUNDO: Que, la Corporación Educacional Arica College, al contestar pidió el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas.

Al efecto, niega y controvierte todo. Con todo reconoce la relación laboral, y el monto de la remuneración de la demandante.

Plantea que el despido se encuentra justificado y que en la carta de despido están los fundamentos de hecho, habiendo dado cabal e íntegro cumplimiento a las normas laborales pertinentes. Agrega que se determinó la causal de despido del artículo 160 N° 2 del Código del Trabajo. Además, plantea infracciones al contrato de trabajo, específicamente respecto de la cláusula de confidencialidad.

Alega la excepción de finiquito; también la improcedencia del pago de remuneraciones de agosto de 2023 a febrero de 2024, por no concurrir los requisitos legales respecto del demandante.

Plantea la improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por la actora, o en subsidio pide se la exima del pago de las costas de la causa.

III.- De la Prueba Incorporada por las Partes.

A.- De la Prueba del Demandada.



1.- Documentos:

TERCERO: Que, la parte demandada incorpora los siguientes documentos:

Documental: Registro de Audio 2340519156-3-1333-240702-00-03.

1.- Contrato de trabajo celebrado por las partes, de fecha 9 de agosto de 2019.

Consta del documento que el demandante, como trabajadora, Profesor, se desempeñará en la Unidad Técnica Pedagógica del Establecimiento Educacional Arica College.

Asimismo, se estableció una cláusula sobre la confidencialidad, según la cual el trabajador se obligó a no revelar, transmitir o divulgar información de la Corporación empleadora ante terceros.

2.- Anexo de contrato de trabajo, de fecha 1 de diciembre de 2021.

En el documento las partes declaran la existencia de la relación laboral desde el 9 de agosto de 2019; y, que desde la fecha del anexo el trabajador desempeñaría la labor de Inspector Educacional y Asistente Técnico en Sonido.

Se establece la cláusula de Lealtad a la Compañía (sic), conforme a la cual el trabajador no podrá tomar parte directa o indirectamente, en negocios, empleos, actividades, u ocupaciones que estén relacionadas o sean competitivas con las actividades propias del giro del empleador. Agrega que durante la vigencia del contrato el trabajador destinará todo su tiempo productivo, energía y destrezas al desempeño de sus obligaciones.

3.- Comunicación escrita del término del contrato de trabajo, de fecha 29 de agosto de 2023, que la empleadora demandada entrega al trabajador demandante, informándole del despido.

Consta que la causal legal del artículo 160 N° 2 del Código del Trabajo, esto es, “Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador”.

Como fundamento de la causal se hace referencia al contrato de trabajo, en especial a la cláusula de confidencialidad y a la de lealtad.

Luego se expresa: “Ahora bien, habida consideración al vínculo de familiaridad que existe entre usted y don Manuel Salamanca Sotomayor (su padre) y don Mauricio Salamanca Gallardo (su hermano), sabido es por su persona que éstos han sido del caso constituir la Corporación Educacional Ayllu, de la cual su hermano Mauricio Salamanca Gallardo, a la época de esta misiva, es su representante legal. Sabido es -también- de usted que el inmueble en donde actualmente se emplaza nuestra comunidad educativa (Avenida Argentina N° 2330, Arica) es arrendada a la Sociedad Inmobiliaria Espíndola Sotomayor S.A., de la cual su padre el señor Salamanca Sotomayor es su socio mayoritario y representante legal. Sabido es -también- de usted que la intención de su padre y



su hermano es, precisamente, o hacerse cargo de la administración y representación legal de nuestra comunidad educativa, sin ser actualmente parte legal integrante de esta, y/o instalar en el antes referido inmueble su “propia” comunidad educacional (Ayllú), y con ello desplazar a nuestra administración y así poner fin a nuestro proyecto educativo de más de veinticinco años de antigüedad.

En razón de lo anterior, y a fin a los intereses y propósitos propios de su padre y hermano, usted, desde un tiempo a la fecha (segunda quincena de julio del presente año en adelante) ha venido ejerciendo sobre el personal docente, asistente de la educación y administrativos de nuestra comunidad educativa presiones varias tendiente convencerles y/o animarles para que, en un futuro que usted señala como próximo (año 2024 en adelante) comiencen a prestar servicios para la Corporación Educacional Ayllu, prometiéndoles y negociando, en nombre de su padre y de su hermano, y a título propio también, que a quienes decidan “cambiarse o seguirle” le serán respetados “todos sus derechos como trabajadores tales como funciones, remuneraciones, años de servicios, y otros, y que dichas labores se desarrollarán en el mismo inmueble en donde actualmente funciona nuestra comunidad educativa.

Los sucesos y acciones antes descritas y por usted realizadas las ha venido desarrollando de manera cada vez más seguidas y reiterativas, sea verbalmente, sea mediante comunicación de la red social WhatsApp, sea públicamente, comportamiento y acciones vuestras que mantienen a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa en un constante estado de máxima preocupación, estrés y alerta, impidiéndoles a aquellos el poder saber y/o conocer sobre el real futuro de nuestra Corporación, preocupación y tensión que sin lugar a dudas afecta mayoritariamente a nuestro alumnado, apoderados y colaboradores todos.

En consecuencia, los hechos y/o circunstancias anteriormente descritas “atentan y dañan gravosamente los intereses propios de nuestra comunidad educativa”, y configuran, a juicio nuestro, la causal contenida en el N° 2 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, “Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del guro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador”.

Se incluye comprobante de correo certificado de la misma fecha.

4.- Finiquito del contrato de trabajo de fecha 1/9/2023, firmado por las partes y autorizado notarialmente el 7/9/2023.

Consta que el trabajador demandante hizo reserva de derechos y acciones respecto del despido injustificado y cobro de indemnizaciones por el término del contrato de trabajo.

5.- Certificado de Nacimiento del actor, emitido por el Servicio de Registro Civil, de



fecha de 21/11/2023, donde consta que su padre es don Manuel Antonio Salamanca Sotomayor.

6.- Certificado de Nacimiento de Mauricio Antonio Salamanca Gallardo, emitido por el Servicio de Registro Civil, de fecha 21/11/2023, donde consta que su padre es don Manuel Antonio Salamanca Sotomayor.

7.- Reducción a escritura pública de “Acta Constitutiva y Estatutos” de Corporación Educacional Ayllu College C.E.”, Repertorio 65- 2022, de fecha 10 de enero de 2022, de la Notaria Lazcano de esta ciudad.

Consta del documento que don Manuel Antonio Salamanca Sotomayor, don Maycole Francoise Salamanca Welch, don Mauricio Antonio Salamanca Gallardo, y don Manuel Antonio Salamanca Gallardo (Rut N° 17.553.151-3), constituyen la Corporación sin fines de lucro, con fines educacionales, que se denominará “Ayllu College CE”, con el giro de educación (sic); y con la finalidad de proyectos en establecimientos educacionales subvencionados.

8.- Reducción a escritura pública de “Primera Asamblea General Extraordinaria” de Corporación Educacional Ayllu College C.E., de 13 de marzo de 2023, Repertorio 970- 2023, de la Notaria Lazcano de esta ciudad.

9.- Reducción a escritura pública de “Segunda Asamblea General Extraordinaria” de Corporación Educacional Ayllu College C.E., de 22/5/2023, Repertorio 1887- 2023, de la Notaría Lazcano de esta ciudad.

10.- Certificado Dominio Vigente y copia de inscripción de fojas 251 N° 208 del Registro de Propiedad del CBR del año 2006, de 18/4/2023, respecto del inmueble en donde funciona la Corporación Educacional Arica College.

11.- Escritura Pública de “Contrato de Comodato”, suscrito y convenido entre Sociedad Inmobiliaria Sotomayor Espíndola S.A. y Corporación Educacional Ayllu College C.E., de 23/6/2023, Repertorio 2.349-2023

12.- Comprobante Dirección del Trabajo “aviso carta de despido”, de 31/8/2023

2.- Confesión.

CUARTO: Que, la demandada hace comparecer a estrados **al demandante**, don Manuel Antonio Salamanca Gallardo, para la prueba de **confesión**, quien juramentado legalmente declara que no es socio de la Corporación Educacional Ayllú; que su padre es socio de la Sociedad Espíndola Sotomayor, la que es dueña del inmueble donde funciona el Colegio; y que el Ayllú debía cumplir su objetivo en ese inmueble.

3.- Testigos.

QUINTO: Que, la demandada hizo comparecer a estrados a la testigo doña **Leslie Nayarett Poblete Serna**, cédula de identidad N° 15.339.435-0, quien advertida de su obligación de decir verdad y lealmente juramentada, declara que conoce al



demandante quien trabajó en el Colegio Arica College donde ella también trabaja. Dice que sabe que el demandante realizó gestiones a favor de la Corporación Ayllú; que él se interpuso en gestiones del sindicato del Colegio, por el tema del desalojo, así como en un recurso de protección para el que se pusieron unas nominas que firmaran los apoderados u el demandante entorpeció esa labor sacando las hojas y diciendo que los apoderados no firmaran. Dice que el desalojo del Colegio lo motivó la inmobiliaria; y que la Corporación Ayllú quiere instalar un colegio en el mismo lugar de la Corporación Arica College, lo que implica la pérdida del lugar de trabajo. Dice que el demandante hizo ofrecimientos a los docentes del Colegio para trabajar en la Corporación Ayllú.

Contrainterrogada, declara que en su caso trabaja para la demandada desde el 2017 como Profesora de Historia y Geografía; y que el actor se desempeñaba en Inspectoría, quien no tenía facultades para representar al Colegio. Dice que el ofrecimiento del demandante a los trabajadores para el cambio fue de palabra; que a ella no le dijo nada; que los trabajadores le comentaban de ese ofrecimiento, de que serían contratados por la Corporación Ayllú. Señala que el año 2022 se le notificó al Colegio por un desalojo y se hicieron varias acciones para que eso no ocurriera y que ella estuvo presente en todas esas reuniones como Presidenta del Sindicato. Dice que ese litigio empezó el 2022 y el actor ya estaba en el Colegio; él quiso entrar al Sindicato pero los trabajadores se opusieron por lo que hizo en relación del recurso de protección al sacar las hojas.

SEXTO: Que, la demandada hizo comparecer a estrados al testigo don **Ivan Patricio Carrasco Herald**, cédula de identidad N° 9.197.966-7, quien advertido de su obligación de decir verdad y lealmente juramentado, declara que el demandante le dijo que para el próximo año no contaría con su presencia ya que estaba muy viejo, y que eso ocurrió en el patio del Colegio Arica College. Dice que en su caso es Inspector y el actor trabajaba atendiendo público, y sabe que éste se contactó con gente para seguir un año más ya que el Colegio terminaría y llegaría otro colegio; y se nombraba a otro colegio, de otra administración; que sería de los Salamanca. Sabe que el Colegio Arica College tiene conflictos con la Inmobiliaria Salamanca y entiende que el demandante es hijo del socio mayoritario de la inmobiliaria, y que el conflicto era que la inmobiliaria se posicionara con otro colegio, el Ayllú, que iba a funcionar en el mismo lugar y el Arica College iba a desaparecer. Declara que en su caso fue desechado, que el demandante le dijo que era muy viejo para trabajar en el Ayllú; que le ofreció trabajo a otros trabajadores, pero no en su caso por estar muy viejo.

Contrainterrogado, declara que trabaja en el Arica College desde el 2016,



como Asistente de la Educación; que conoce al actor, trabajaba en el Colegio en UTP, luego en Inspectoría. Dice que los ofrecimientos de trabajo eran verbales y llamadas telefónicas, pero no vio esto. Señala que el Colegio tiene unos 1.000 alumnos.

Preguntado por el Tribunal, explica que el demandante le dijo “estay viejo para el otro año”, y que no te van a nombrar para el otro año. Dice que eso fue una falta de respeto y lo dejó helado.

B.- De la Prueba de la Demandante.

1.- Documentos.

SEPTIMO: Que, la parte demandante incorporó los siguientes documentos:

- 1.- Carta de despido de fecha 29 de agosto de 2023, ya incorporada.
- 2.- Contrato de trabajo entre las partes, 9 de agosto de 2019, ya incorporado.
- 3.- Anexo de contrato de trabajo de fecha 1 de marzo de 2021, referido al ajuste del sueldo base; y, jornada de trabajo.
- 4.- Anexo de contrato de trabajo de fecha 20 de abril de 2021, referido al ajuste del sueldo base.
- 5.- Anexo de contrato de trabajo de 1 de diciembre de 2021, ya incorporado.
- 6.- Finiquito de contrato de trabajo, ya incorporado.

2.- Confesional.

OCTAVO: Que, la demandante hace comparecer a estrados a la demandada, la **Corporación Educacional Arica College**, para la prueba de confesión, y por ella se presenta don Sebastián Cáceres Espíndola, su representante legal, quien juramentado legalmente declara que el Colegio Arica College tiene unos 1.000 alumnos; que el actor trabajó en el Colegio hasta agosto de 2023, como Inspector en trabajo administrativo y atención de público, quien no tenía representación del Colegio. Dice que el despido fue por negociación incompatible, pero no sabe el fundamento legal.

3.- Testigos.

NOVENO: Que, el demandante hace comparecer a estrados al testigo don **Karl Dietmar Behl Jerez**, cédula de identidad N° 19.496.330-0, quien advertido de la obligación de decir verdad y juramentado legalmente, declara que trabaja para la demandada hasta junio de 2023, como Psicólogo; que conoce al actor, que fueron compañeros de trabajo en el Arica College; que el demandante era Inspector y atendida a las personas; que el Colegio tiene unos 1.000 alumnos. Dice que la Corporación Ayllú no tiene autorización para funcionar. Dice que con el actor tuvo una conversación informal donde le pidió su currículum.

IV.- Determinación de los Hechos y Valoración de la Prueba.

DECIMO: Que, conforme lo dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo, la



prueba rendida en el procedimiento laboral debe ser ponderada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, y al efecto establece que el tribunal debe expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud asigne valor o desestime dichas pruebas, y explica que el Juez, al valorar la prueba, deberá tomar en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso, de manera de conduzcan lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

UNDECIMO: De la Relación Laboral. Que, conforme al contrato de trabajo celebrado entre el demandante don Manuel Antonio Salamanca Gallardo, como trabajador, y la demandada, la Corporación Educacional Arica College, como empleadora, y sus anexos (documentos del N° 1 y 2 del motivo 3°, y N° 3 y 4 del motivo 7°), se logra la convicción que entre las partes existió una relación laboral, iniciada el 9 de agosto de 2019, en virtud de la cual el actor asumió el cargo de Inspector en el Establecimiento Educacional Arica College.

Asimismo, se estableció una cláusula sobre la confidencialidad, según la cual el trabajador se obligó a no revelar, transmitir o divulgar información de la Corporación empleadora ante terceros.

También se estableció la cláusula de Lealtad a la Compañía (sic), conforme a la cual el trabajador no podrá tomar parte directa o indirectamente, en negocios, empleos, actividades, u ocupaciones que estén relacionadas o sean competitivas con las actividades propias del giro del empleador. Agrega que durante la vigencia del contrato el trabajador destinará todo su tiempo productivo, energía y destrezas al desempeño de sus obligaciones.

En cuanto a la remuneración mensual de la trabajadora, ascendía a la suma de \$1.605.422.-, monto no controvertido por las partes.

DUODECIMO: Del Término de la Relación Laboral. Que, conforme a la comunicación escrita de término del contrato de trabajo (documento del N° 3 del motivo 3°), la Corporación demandada y empleadora despidió al trabajador demandante, el día 29 de agosto de 2023, por la causal del artículo 160 N° 2 del Código del Trabajo, esto es, “Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador”.

El fundamento de la causal, según la carta de despido, dice relación con dos capítulos, el primero referido al contenido del contrato de trabajo y las obligaciones allí asumidas por el trabajador, en especial las cláusulas de lealtad y de confidencialidad; y, el segundo acápite relacionado con la relación de familia que el actor tiene con don Manuel Salamanca Sotomayor (su padre) y con don



Mauricio Salamanca Gallardo (su hermano), quienes constituyeron la Corporación Educacional Ayllu, y que el trabajador sabía de la intención de su padre y su hermano de hacerse cargo de la administración y representación legal de la comunidad educativa que administra la empleadora demandada, e instalar en el mismo inmueble su “propia” comunidad educacional, y con ello poner fin a su proyecto educativo.

Respecto de este segundo capítulo, en la carta y en sus fundamentos, se agrega e imputa al trabajador que él desde un tiempo, segunda quincena de julio de 2023, ha ejercido sobre el personal docente, asistente de la educación y administrativos de la Corporación demandada presiones tendiente convencerles y/o animarles para que el año 2024, comiencen a prestar servicios para la Corporación Educacional Ayllu.

También se le acusa que las acciones antes descritas las ha realizado de manera cada vez más seguidas y reiterativas, sea verbalmente, sea mediante comunicación de la red social WhatsApp, sea públicamente, comportamiento y acciones suyas que mantienen a todos los integrantes de la comunidad educativa en un constante estado de máxima preocupación, estrés y alerta, impidiéndoles a aquellos el poder saber y/o conocer sobre el real futuro de la Corporación, preocupación y tensión que sin lugar a dudas afecta mayoritariamente al alumnado, apoderados y colaboradores.

DECIMOTERCERO: Que, el artículo 162 del Código del Trabajo, establece que cuando el empleador decide poner término al contrato de trabajo de un trabajador, queda obligado a señalar la causal legal específica que le permite tal cosa, y además, expresar los hechos que la conforman, esto es, los fundamentos que dan cuenta de la concurrencia de esa causal.

A su vez, el artículo 168 del mismo Código, dispone que si el trabajador considera que el despido por alguna de las causales de los artículos 159, 160 y 161, es injustificado, indebido o improcedente, deberá recurrir al Juzgado del Trabajo, a fin que éste así lo declare, y en tal caso, el Juez ordenará el pago de la indemnizaciones respectivas.

Por último, el artículo 454 N° 1 del Código del Trabajo establece que en los juicios sobre despido corresponderá en primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido.

Tal como se ha establecido, en la carta aviso de despido, el empleador sustentó su decisión en la causal del artículo 160 N° 2, esto es, en



negociaciones realizadas por la trabajadora dentro del giro del negocio de la empresa, prohibidas por escrito en el respectivo contrato.

DECIMOCUARTO: Que, respecto de las cláusulas de confidencialidad y lealtad que efectivamente están consagradas en el contrato de trabajo como obligaciones impuestas y asumidas por el trabajador demandante, éstas se refieren a la obligación del trabajador de no revelar, transmitir o divulgar información de la empleadora ante terceros; y que no podrá tomar parte directa o indirectamente, en negocios, empleos, actividades, u ocupaciones que estén relacionadas o sean competitivas con las actividades del giro del empleador.

De la forma como están redactadas esas prohibiciones y obligaciones, su infracción, su vulneración, como cualquier otro quebrantamiento o transgresión, quedan subsumidas en la causal N° 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

En este caso, la empleadora no invocó dicha causal, sino que la del N° 2 del mismo artículo, esto es, negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. Esta causal exige la conducta del trabajador de realizar actividades ciertas, determinadas, concretas y reales, que conformen el giro del empleador.

DECIMOQUINTO: Que, el concepto “negociar” a que se refiere el N° 2 del artículo 160, debe ser entendido como la acción de comerciar, esto es, intercambiar productos o servicios, de acordar entrega de un bien o de un servicio y recibir el pago del precio. Ello supone necesariamente un pacto, un acuerdo, entre quienes interactúan en la negociación. La negociación es un conjunto de conductas dirigidos a la conclusión de un negocio.

La causal también requiere que ese negocio se refiera directamente al giro del empleador.

En el caso de autos, el giro de la Corporación empleadora es el servicio de educación, el que ejecuta en el establecimiento educacional Arica College de Arica. Entonces, las conductas que debía realizar el trabajador para entender que incurrió en negociaciones que conformaron la causal de despido, debían estar vinculadas a ese giro, esto es, el servicio de educación.

A este respecto, conforme al Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2005, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, en su artículo 46, establece que los establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media, deberán estar amparadas por un sostenedor; y, que serán sostenedores las personas jurídicas



de derecho público, tales como municipalidades y otras entidades creadas o reconocidas por ley, y las personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social único sea la educación. El sostenedor será responsable del funcionamiento del establecimiento educacional.

Consecuentemente, sólo las personas jurídicas pueden ejercer el giro educacional, jamás una persona natural, como el demandante. Esta circunstancia implica que el trabajador jamás podría desarrollar el giro o negocio de la empleadora, esto es, el servicio educacional.

Ahora bien, la empleadora demandada, para configurar la causal se refirió a la Corporación Educativa Ayllú, competidora suya, y a que el trabajador sabía de la intención de los socios de aquella de hacerse cargo de la administración y representación legal de la comunidad educativa que administra la empleadora demandada, e instalar en el mismo inmueble su “propia” comunidad educacional, y con ello poner fin a su proyecto educativo. También dijo que el trabajador realizó acciones o conductas en su trabajo a favor de esa Corporación y en perjuicio de su empleador; que ejerció sobre el personal docente, asistente de la educación y administrativos de la Corporación empleadora presiones tendientes a convencerles y/o animarlos para que el año 2024, comiencen a prestar servicios en la Corporación Educacional Ayllu.

Entonces, la propia demandada reconoce en la carta de despido que las negociaciones del giro suyo, la educación, no las hacía el demandante, sino una persona jurídica, la Corporación Educacional Ayllú; y, que el trabajador trató de animar al personal a prestar en dicha otra Corporación. Así, los hechos que se describen en la comunicación escrita de término del contrato de trabajo, ya sea los referidos a la Corporación Ayllú o al trabajador, no conforman negociaciones ciertas, reales y concretas del giro de educacional, puesto que en el primer caso sólo se habla de intenciones, es decir, de una probable situación futura, y en el segundo, conductas del actor para convencer a trabajadores de la demandada para prestar servicios para aquella. En el primer caso, a su vez, es una cuestión hipotética, que no existe; en el segundo caso, nada tiene que ver con negociaciones del giro educacional.

DECIMOSEXTO: Que, como ya se explicó, la empleadora demandada estaba obligada a probar en juicio todos esos hechos.

Ahora, si bien se incorporaron antecedentes de la existencia de Corporación Educacional Ayllú, de la cual forma parte el actor (documento N° 7 del motivo 3°), del giro de educación, y con la finalidad de proyectos en establecimiento educacionales subvencionados, no concurre ningún elemento de juicio, ninguna prueba que acredite que esa Corporación ejerce efectivamente, en



la realidad, en concreto, el giro de la demandada.

Sin perjuicio de ello, se imputa al trabajador que sabía de la intención de su padre y hermano de hacerse cargo de la administración de la comunidad educativa que administra la empleadora demandada, e instalar en el mismo inmueble su “propia” comunidad educacional, y con ello poner fin a su proyecto educativo. Aquí, se le acusa de un pensamiento, de una idea, de un conocimiento, de la intención de otros, es decir, de algo que no es un hecho; y, a su vez, se le culpa que ese pensamiento suyo decía relación, a la intención de su padre y hermano de querer hacer algo. Nada más abstracto, indefinido, indeterminado, todo eso son ideas, pensamientos, muy alegados del concepto de negociación a que alude la causal de despido.

DECIMOSEPTIMO: Que, el único hecho cierto es la existencia de la Corporación Educacional Ayllú (documento N° 7, 8 y 9 del motivo 3°), pero no existe prueba alguna que ella realice efectivamente el giro de la demandada. De ello se sigue que no existe negocio alguno que sea paralelo al de la empleadora demandada, menos aún que esa otra Corporación realice el mismo giro de ésta.

En este orden de ideas, la demandada hizo comparecer a estrados a la testigo doña Leslie Nayarett Poblete Serna (motivo 5°), quien en lo pertinente expone que el demandante realizó gestiones a favor de la Corporación Ayllú; que él se interpuso en gestiones del Sindicato del Colegio, por el tema de un desalojo, así como en un recurso de protección para el que se pusieron unas nominas que firmaran los apoderados y el demandante entorpeció esa labor sacando las hojas y diciendo que los apoderados no firmaran. Dice que el desalojo del Colegio lo motivó la inmobiliaria; y que la Corporación Ayllú quiere instalar un colegio en el mismo lugar de la Corporación Arica College, lo que implica la pérdida del lugar de trabajo. Dice que el demandante hizo ofrecimientos a los docentes del Colegio para trabajar en la Corporación Ayllú. Agrega que el ofrecimiento del demandante a los trabajadores para el cambio fue de palabra; que a ella no le dijo nada; que los trabajadores le comentaban de ese ofrecimiento, de que serían contratados por la Corporación Ayllú.

Conjuntamente, declara el testigo don Ivan Patricio Carrasco Heraldo (motivo 6°), quien expone que el demandante le dijo que para el próximo año no contaría con su presencia ya que estaba muy viejo; que el actor se contactó con gente para seguir un año más ya que el Colegio terminaría y llegaría otro colegio; que se hablaba de otra administración; que la Inmobiliaria Salamanca se posicionara con otro colegio, el Ayllú, que iba a funcionar en el mismo lugar y que el Arica College iba a desaparecer. Declara que en su caso fue desechado, que el demandante le dijo que era muy viejo para trabajar en el Ayllú; que le ofreció



trabajo a otros trabajadores, pero no en su caso por estar muy viejo.

Sin perjuicio de la despreciable conducta del demandante respecto de sus compañeros de trabajo, no se configura la causal de negociaciones incompatibles del N° 2 del artículo 160, sino que las del N° 7 del mismo artículo del Código del Trabajo, pero ésta no fue invocada.

Se debe concluir que las acciones del trabajador, aquellas de las que fue acusado en la carta aviso de despido, y que suponían negociaciones dentro del giro de su empleador, en relación con la Corporación Educacional Ayllú, no existieron y no pudieron existir, por cuanto esta entidad no desarrolla ninguna gestión del giro de la educación, al que se dedica la empleadora.

DECIMOCTAVO: Que, a base de lo relacionado, de la valoración de la prueba, de los hechos acreditados en el juicio, y no acreditada la existencia de negociaciones del trabajador dentro del giro de la empleadora, el Tribunal ha logrado la convicción que él no incurrió en dicha causal de despido.

DECIMONOVENO: De las Prestaciones. Que, debiendo acogerse la demanda, por la aplicación indebida de la causal del artículo 160 N° 2 del Código del Trabajo, se dará lugar a las prestaciones establecidas en el artículo 168 del mismo Código, esto es, la indemnización sustitutiva del aviso previo y a la indemnización por años de servicio, y en este último caso con el recargo que la misma norma establece.

En este sentido, la base de cálculo de las indemnizaciones y prestaciones a que haya lugar, es aquella determinada en este fallo, esto es, la suma de \$1.605.422.- (motivo 8°).

Consecuentemente, se condenará a la demandada a pagar al demandante la indemnización sustitutiva del aviso previo, por \$1.605.422.-; la indemnización por 4 años de servicio, por \$6.421.688.-; y, el incremento del 80% de la indemnización por años de servicio, contemplado en la letra c) del artículo 160 del Código del Trabajo, por \$5.137.350.- Todo con intereses, reajustes y costas.

VIGESIMO: Que, en cuanto a la suma de \$9.739.560.- que el actor reclama como indemnización contenida en el Estatuto Docente entre el 30 de agosto de 2023 y el 28 de febrero de 2024, debe desestimarse tal alegación.

En efecto, en primer lugar, se trata de una pretensión sin fundamento alguno, no bastando la remisión al Estatuto Docente. En este sentido, dicha normativa, la Ley N° 19.070, es aplicable únicamente a los profesionales de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales administrados por Municipalidades, por Corporaciones Municipales de Educación, o por los Servicios Locales de Educación Pública, tal como surge de sus artículos 1° y 3°.

La misma ley señala, en su artículo 78, que las relaciones de los



docentes y empleadores del sector particular, que incluye a los particulares pagados y a los particulares subvencionados, se regirán por las normas del Código del Trabajo, más las específicas de los artículos 78 y siguientes del referido Estatuto.

Ahora bien, la Corporación Educacional Arica College, corresponde a un establecimiento particular subvencionado, y por tanto la relación laboral con el demandante, estuvo regulada por el Código del Trabajo y por los artículos 78 y siguientes de la Ley N° 19.070, o Estatuto Docente.

En este orden de ideas, el artículo 82 del Estatuto, aplicable al caso de autos, establece que todo contrato vigente al mes de diciembre se entenderá prorrogado por los meses de enero y febrero.

Consecuentemente, considerando que el término del contrato de trabajo entre las partes concluyó el día 29 de agosto de 2023 (motivo 12°), no resulta ajustado a derecho la petición del actor en esta parte.

VIGESIMO PRIMERO: Que, el resto de la prueba incorporada, descrita en los considerando pertinentes, en nada altera los hechos ya precisados, las consecuencias jurídicas de los mismos, las conclusiones a que se ha arribado en estas sentencia, y la decisión definitiva contenida en ésta.

Al efecto, el artículo 459 del Código, a propósito de los requisitos de la sentencia definitiva, dispone en su N° 4, que debe contener el análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación.

En esta parte es necesario tener presente que la obligación de analizar toda la prueba sólo implica realizar una revisión, un examen, una observación a ella, a fin de conocer su contenido, pero en caso alguno supone ponderar o valorar toda la prueba; tampoco es obligación del Tribunal fundamentar el rechazo de alguna prueba. Esto no es parte de la sana crítica laboral, ya que la exigencia al Juez es respecto de la prueba que le genera la certeza y luego la convicción, tal cómo surge claramente de la norma legal citadas, siéndole innecesario fundamentar el rechazo de prueba.

Además, el artículo 456 del Código del Trabajo, obliga al Juez del Trabajo a ponderar o valorar sólo aquella la prueba que lo conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Y, visto además lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 7°, 10, 160 N° 2, 162, 168, 173, 420, 425, 429, 432, 434, 446, 450, 452, 453, 454, 456, 457, 458 y 459 del Código del Trabajo; y artículos 78 y siguientes de la Ley N°19.070 , **SE DECLARA :**

I.- Que, SE ACOGE la demanda deducida por **MANUEL**



ANTONIO SALAMANCA GALLARDO, ya individualizado, en contra de la **CORPORACION EDUCACIONAL ARICA COLLEGE**, representada legalmente por don Jorge Cañipa Mamani, también individualizada, en cuanto que el término del contrato de trabajo que las unió se produjo por un despido indebido, conforme se explicó y concluyó en esta sentencia.

II.- Que, como consecuencia de la decisión precedente, se condena a la empleadora demandada, a pagar al trabajador demandante, las siguientes prestaciones laborales:

- 1.-** La indemnización sustitutiva del aviso previo, por **\$1.605.422.-**
- 2.-** La indemnización de 4 años de servicio, por **\$6.421.688.-**
- 3.-** El incremento del 80% de la indemnización de años de servicio, conforme a la letra c) del Artículo 160 del Código del Trabajo, por **\$5.137.350.-**

Las sumas de dinero señaladas precedentemente deberán ser pagadas por la demandada más reajustes e intereses legales, de la forma establecida en el artículo 173 del Código del Trabajo.

III.- Que, en todo lo demás se rechaza la demanda.

IV.- Que, no se condena en costas a la demandada por no haber sido completamente vencida.

Regístrese y notifíquese.

RIT O-289-2023

RUC 23- 4-0519156-3

Dictada por don **FERNANDO GONZALEZ MORALES**, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica. En Arica a diecinueve de julio de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

